

CAPÍTULO SEGUNDO

EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MAGREB: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MAGREB: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

Por JOSÉ MARÍA MELLA MÁRQUEZ

INTRODUCCIÓN

El hecho más sobresaliente de las economías magrebíes en las dos últimas décadas es la fuerte ralentización del dinamismo de crecimiento observado en relación con períodos anteriores. Esta ralentización del crecimiento económico en su conjunto caracteriza también al sector manufacturero. No obstante, estos negativos resultados han afectado en mayor medida a Argelia, Libia y Mauritania que a Marruecos y Túnez. La evolución de la agricultura continúa dependiendo mucho más —como es bien sabido— de factores climáticos que del necesario cambio estructural de la economía.

Desde el punto de vista de la estructura económica, cabe decir que el sector manufacturero posee un peso marginal en el PIB, la mayor parte de su producción está constituida por industrias de muy débil valor añadido de primera transformación y no se ha desarrollado aún, con una determinada envergadura, una industria dinámica de bienes intermedios y de capital de una cierta complejidad. La agricultura, aunque ocupa todavía una parte importante de la población activa, presenta una aportación a la producción reducida, sin relación alguna con la población empleada. Sin duda, la bajísima productividad —cuando no nula— del empleo agrario explica perfectamente este tan desproporcionado fenómeno de elevada tasa de población rural y baja producción agraria. El sector servicios absorbe la mayor parte del empleo; aunque su preponderancia no refleja

en modo alguno el perfil propio de las economías desarrolladas, en las que la terciarización va acompañada de una dinamización económica y de un proceso de modernización, ya que el contenido de esos servicios no viene dado por actividades avanzadas sino de carácter tradicional, propios de una economía informal.

A estos rasgos hay que añadir la existencia de una mano de obra abundante, no cualificada (caracterizada por una elevada tasa de analfabetismo) y de muy reducida productividad; un bajo nivel de dotación de infraestructuras, la falta de capitalización de las empresas y la todavía pesada carga de la deuda externa, entre otros factores, para entender la debilidad productiva de las economías magrebíes y los desniveles tan patentes en términos de renta per cápita con los países del Mediterráneo Norte.

Es evidente también que el funcionamiento de la economía se ha visto profundamente afectada por factores extraeconómicos de gran trascendencia: los cambios institucionales derivados de los nuevos acuerdos internacionales (finalización de la Ronda Uruguay y creación de la OMC, acuerdos de libre comercio con la UE, fundamentalmente) con la mayor apertura al exterior, el ascenso del integrismo islámico con sus negativas consecuencias en términos de inseguridad y pérdida de confianza, la inestabilidad política generadora de incertidumbre, las elevadas desigualdades en la distribución de la renta que quiebran la asistencia de una mínima cohesión social y la presencia de sectores públicos burocratizados, rentistas presa fácil de la corrupción e ineficientes que asfixian el imprescindible protagonismo de la sociedad civil.

El planteamiento metodológico seguido se basará en el análisis de la evolución económica de los países del Magreb (medida por su PIB y/o su PIB per cápita), a partir de la consideración conjunta e integrada de:

- Los factores productivos: población y capital humano; el territorio, los recursos naturales y el medio ambiente; la tecnología; las infraestructuras; los recursos financieros.
- Las instituciones nacionales e internacionales: sector público, empresas, familias, acuerdos con la UE y el GATT, la política económica aplicada.
- Los actores políticos, económicos y sociales: el Estado, empresarios, trabajadores, mujeres, grupos de presión y ciudades, teniendo en cuenta el contexto cultural e ideológico propio del mundo árabe magrebí.

UN PASADO DE LUCES Y SOMBRAS

La actual fase de liberalización y desregulación ha situado a las economías del Magreb —como le sucede, por lo demás, a las del resto del mundo— en una posición que implica profundas reformas dirigidas a asegurar una mayor integración de los países en las nuevas exigencias del mercado mundial y a adaptar las estructuras productivas al nuevo contexto de globalización económica. Las economías magrebíes fueron adoptando —a lo largo de los años 80— los denominados “programas de ajuste estructural” (de acuerdo con la terminología de su patrocinador, el Fondo Monetario Internacional), que están basados en una política con una doble vertiente: una primera vertiente de “estabilización”, tendente al logro a corto plazo de los equilibrios fiscales y de balanza de pagos; y una segunda de “reformas estructurales”, orientada a la consecución a medio plazo de una mejora en la eficiencia del funcionamiento del sistema productivo, al aumento del nivel de competitividad de la economía y a la elevación de la tasa de crecimiento económico.

Estas políticas de ajuste —aplicadas con diferentes matices a las condiciones específicas de cada país— han dado en general como resultado inicialmente una reducción del déficit comercial por incremento de las exportaciones, pero posteriormente han generado dificultades en el comercio de manufacturas debido al contenido fuertemente importador de estas economías. Los indicadores de contribución al saldo corriente muestran una configuración semejante: fuerte contribución positiva de los servicios (turismo) y/o de las transferencias, y muy negativa de las mercancías y de la carga de los intereses. Las perspectivas de futuro —que veremos más tarde— son inciertas, pero indudablemente los procesos de desarrollo de estos países necesitarán de fuertes importaciones de bienes de capital y de bienes de consumo para una población con mayor renta que, de no verse compensadas por un mayor dinamismo de las exportaciones, llevarán a un desequilibrio creciente del sector exterior de estas economías.

El objetivo de reducción del déficit de ahorro se ha acometido con una cierta liberalización del sistema financiero —para aumentar los depósitos bancarios y los fondos prestables— y con un control del déficit público, a través de una reducción de los gastos y un incremento de los ingresos. Ahora bien, la evolución del ahorro y la inversión depende fuertemente de la relación existente entre los sectores público y privado de cada economía. Y así ha sucedido que Túnez, por ejemplo, ha visto limitada su capa-

cidad interna para financiar la inversión por la incapacidad de la Administración Central para evitar la caída de los ingresos fiscales, que —por el contrario— en el caso de Marruecos se ha visto mejorada por un sensible incremento de los impuestos sobre la renta y las tasas sobre bienes y servicios. De cualquier manera, tanto en los dos países citados como en los restantes, la capacidad de limitación del gasto se ha revelado insuficiente.

En definitiva, la situación económica de estos países ha mejorado considerablemente en el curso de los últimos años como consecuencia de los programas de ajuste estructural, los cuales han permitido estimular las exportaciones, mejorar la situación financiera, controlar los déficits internos y externos y elevar la tasa de crecimiento en un contexto de menor inflación (Mella, 1997). El progreso realizado —en la transición de unas economías administradas verticalmente a otras economías en las que las empresas dispongan de un clima más favorable a la iniciativa privada— es indiscutible. Sin embargo, el proceso de reformas motivadas por el ajuste estructural ha sido insuficiente y se ha encontrado en su desarrollo con importantes escollos: por un lado, un impresionante coste social difícilmente asumible sin medidas de compensación y apoyo a los colectivos más desfavorecidos; y, por otro, el ritmo propuesto de ejecución de las reformas no ha tenido y no tiene en cuenta con frecuencia la capacidad de gestión de unas administraciones públicas lentas y muy burocratizadas, y la resistencia al cambio de los agentes económicos —acostumbrados a situaciones de búsqueda de rentas no productivas— para no perder sus posiciones de privilegio en un nuevo entorno más competitivo (Zaim y Jaidi, 1995).

De ahí que deban enfatizarse las prioridades básicas de una estrategia futura: la restauración de los cimientos de la estabilidad macroeconómica (el control del gasto público, la reforma fiscal y el restablecimiento de un tipo de cambio real y competitivo), la racionalización del sector público para hacerlo más ágil y eficaz, la apertura creciente de la economía al resto del mundo y, “last but no least”, la puesta en marcha de un importante programa social de compensación por los efectos negativos en términos de desigualdad de renta, desempleo y empobrecimiento de importantes capas de la población que en caso contrario pondrían en cuestión la continuidad, la estabilidad y la cohesión de cualquier proyecto de desarrollo.

UN PRESENTE CON SERIOS INTERROGANTES

Pero, ¿cuál es, en términos globales, la situación actual del crecimiento económico de los países del Magreb, los cambios en curso y las medidas adoptadas?

El crecimiento económico de *Marruecos* ha fluctuado significativamente en años recientes, debido en lo fundamental a la dependencia del sector agrícola respecto a los recursos hídricos derivado de las eventualidades climáticas, que hace variar enormemente la contribución de la agricultura al PIB según sea el año lluvioso o seco. Las elevadas tasas de crecimiento demográfico han hecho disminuir las tasas de crecimiento de la renta per cápita. Los niveles de ahorro doméstico —mucho menores que en otros mercados emergentes— tienden también a fluctuar con mayor o menor fortuna según el crecimiento económico del país. La deuda externa, tanto en relación al PIB como con las exportaciones, es ciertamente considerable. Las presiones sociales han ocasionado que se mantengan los subsidios al consumo en bienes alimentarios básicos, en las prestaciones sanitarias y en los servicios educativos. Las tasas de inflación —bajas para los estándares de la región— han disminuido intensamente, a pesar del incremento del déficit fiscal y la liberalización de las importaciones. La fortaleza del dirham explica dicho comportamiento, a lo que debe añadirse la debilidad de la demanda interna. El desempleo es, no obstante, masivo, crónico y de carácter urbano. El rápido crecimiento (a una tasa anual media del 3%) de la población joven en edad de trabajar, sin crecimiento comparable en los puestos de trabajo creados, explica el crecimiento de un desempleo que está afectando muy especialmente a los jóvenes graduados universitarios y a los escolares cualificados que no encuentran empleo en el momento de buscar su primer puesto de trabajo.

Esta situación —coherente con las relativamente reducidas tasas de crecimiento y de inversión— ha llevado al gobierno a la necesidad de acometer una política de reformas económicas basadas en la profundización del programa de privatización (ya iniciado en años anteriores, concretamente, en 1982), la atracción de un mayor volumen de inversiones extranjeras y el lanzamiento de un programa de modernización industrial (llamado de "mise à niveau"). Sin embargo, el progreso en el proceso de privatizaciones es lento y no exento de múltiples dificultades de variado signo. Los flujos de inversión extranjera no acaban de expandirse significativamente; en algunos casos, por motivos de incertidumbre política, excesiva burocracia o falta de comunicación con los potenciales inverso-

res y, en otros por la desviación de las inversiones hacia otros mercados alternativos considerados más atractivos. Y el programa de “mise à niveau” tendrá todavía que superar la prueba de los obstáculos institucionales y legales, los elevados costes financieros y fiscales, la debilidad de las infraestructuras y de los recursos humanos y tecnológicos, y, en fin, establecer un entorno favorable a la creación y el desarrollo de las empresas. Desde luego, la voluntad firme del gobierno para sortear estos obstáculos es una condición esencial del logro de los objetivos establecidos en el programa de “mise à niveau”.

El crecimiento económico de *Argelia* depende fuertemente del precio del petróleo, de tal manera que las expansiones y contracciones de la economía están en relación directa con las subidas y bajadas del precio internacional de los crudos. Las posibilidades de diversificación económica hacia otros sectores productivos son todavía limitadas, muy especialmente para el capital extranjero. La economía subterránea o informal se ha convertido en el “sector más dinámico” de la economía y se estima que puede alcanzar el 38% del empleo no agrícola y el 20% de la renta, lo que no deja de ser preocupante por lo que implica de succión de recursos para el sector público —evasión de impuestos, pagos a la seguridad social— y de obstáculo para la modernización y la reforma económicas. Los tipos de interés continúan bajando gracias a una cada vez más reducida tasa de inflación. Los ingresos presupuestarios tienen como fuente principal los impuestos sobre los hidrocarburos, lo que unido a la debilidad de los precios del petróleo y al incrementado de la deuda pública (hasta aproximadamente un 100% del PIB), hacen de *Argelia* una economía especialmente vulnerable al tipo de cambio y a las fluctuaciones internacionales de los tipos de interés. A esta debilidad debe añadirse otra —no menor— relativa a la dificultad del sector privado para crear los puestos de trabajo perdidos en la reconversión del sector público. Se estima que alrededor de un 40% de la fuerza de trabajo del país se encuentra desempleada o subempleada —entre ella, un 70% de los jóvenes—, lo que plantea la necesidad de desarrollar una industria no petrolera con capacidad de generación de empleo.

La política económica seguida —para dar respuesta a los problemas mencionados— viene marcada por la reforma del sector público y la continuación del proceso de privatizaciones, cuyo ritmo está determinado por la evolución política general del país y el grado de confianza y transparencia percibido por los inversores, tanto extranjeros como nacionales.

El crecimiento económico de *Túnez* —antaoño basado principalmente en la agricultura, el petróleo y los fosfatos— descansa actualmente en una economía más diversificada, en la que los sectores manufactureros y el turismo desempeñan un papel relevante. Esta diversificación ha dotado a la economía tunecina de una relativa flexibilidad ante eventuales “shocks” tanto internos como externos. Las presiones inflacionistas —provocadas por aumentos salariales y alzas de la demanda doméstica— han sido relativamente bien controladas por una política monetaria estricta y la apuesta competitiva frente al exterior. El crecimiento anual de la población (1,6%) —el menor de los países árabes— es el resultado evidente de un mayor nivel de vida, de la mejora de la salud y de la educación y de la creciente incorporación de la mujer al mundo laboral. Según estimaciones oficiales, un 60% de los tunecinos forman parte de la “clase media”, lo que indudablemente ha conducido a una cierta estabilidad social. La renta per cápita es —con excepción de Libia— la más elevada del Magreb. Sin embargo, en el pasivo de la economía tunecina hay que contar con una tasa de desempleo todavía elevada —la tasa oficial se eleva a un 15,6%—, lo que representa un desafío y una pesada carga sobre todo para la población joven, la más afectada. En este contexto, las medidas de reforma adoptadas persiguen tres objetivos: primero, elevar la tasa media de crecimiento económico a un 6% para combatir los altos niveles de desempleo, mediante la expansión de las inversiones y la elevación de las exportaciones, derivadas de la mejora de la eficacia, la productividad y la competitividad de la economía; segundo, reducir el déficit público a niveles inferiores al 2% del PIB desde el 4% actual, a través de una mayor eficiencia del sistema impositivo; y, tercero, comprimir aún más la tasa de inflación tratando de converger con la media de la UE (1,6%). La meta no es otra que liberalizar la economía y adaptarla a los patrones dominantes de sus competidores europeos. La vía para alcanzar esa meta está basada en un vasto plan de reformas que afecta a la privatización de empresas públicas, a la liberalización del sistema financiero y al mercado de trabajo, a la supresión de las barreras a las importaciones y a la inversión extranjera y a la incentivación de la inversión privada doméstica especialmente de las pequeñas y medianas empresas.

La economía de *Libia* está dominada por el sector de los hidrocarburos (que representa el 95% de los ingresos por exportaciones), los intentos oficiales para promover el desarrollo de la agricultura y las manufacturas han tenido poco éxito y el conjunto del sistema productivo —excepto el sector energético— se encuentra nacionalizado desde los años setenta bajo el control del Estado. Las sanciones impuestas al país por las Nacio-

nes Unidas en 1992 —por el conocido caso Lockerbie— y la debilidad del precio internacional de los hidrocarburos han ocasionado graves pérdidas a la economía libia desde entonces y han sido un factor esencial de la disminución del nivel de vida de la población. La incertidumbre en torno a las sanciones ha impedido la realización de un proceso de inversiones en infraestructuras y en la agricultura, así como la renovación de la base productiva —vía importaciones de los necesarios equipos— para hacer más eficiente la industria petrolera y de refino. Sin embargo, incluso en esas adversas condiciones, Libia no ha perdido nunca de vista que la asistencia externa resulta fundamental para el desarrollo de su industria petrolera, siempre ha tratado adecuadamente a las compañías extranjeras del sector y continúa solicitando activamente la participación de las mismas en las sucesivas licitaciones realizadas.

La inflación —a pesar de la ausencia de datos oficiales fiables— se estima en torno a un 25-30% anual (según el “EIU’S Worldwide Cost of Living Survey”), los salarios han ido muy por detrás del aumento del coste de la vida durante la pasada década, los niveles de desempleo —sobre todo de los jóvenes— supera el 30% (aunque ello no impida la contratación de trabajadores extranjeros cualificados) y el nivel de vida ha bajado considerablemente a pesar de que los productos básicos (trigo, harina, azúcar y té) están fuertemente subvencionados.

La política económica no parece observar cambios significativos, la continuidad parece la regla en materia de subvenciones y de estricto control de las importaciones y de las actividades del sector privado de la economía, manteniendo el sector energético como aquel que disfruta de un tratamiento más prudente y coherente, a pesar de la “hiperdependencia” del conjunto de la economía respecto al mismo.

La economía de *Mauritania* —basada en tres pilares: la agricultura, la minería y, sobre todo, la pesca— es fuertemente vulnerable o dependiente de las incidencias periódicas de la región y las plagas de langosta, los cambios en los precios de las mercancías y el agotamiento de algunos de sus recursos básicos. La producción nacional es manifiestamente insuficiente para cubrir el consumo doméstico incluso en los años más productivos; consumo que, a su vez, está estimulado por un fuerte estirón demográfico (el más alto de la región, un 2,6% anual) y el éxodo rural hacia las dos principales ciudades del país. Es el país con el menor nivel de renta per cápita de la región y con un elevado nivel de población en condiciones de pobreza (por encima del 50%), aunque en una proporción decreciente a lo largo de la década de los 90. Otro pasivo importante es

el enorme peso de su deuda externa (208% del PIB), si bien las instituciones financieras internacionales (Banco Africano de Desarrollo y Banco Mundial) han seguido manifestando su confianza en el país, otorgándole los créditos de refinanciación correspondientes.

La política económica descansa en un importante esfuerzo de diversificación de la actividad económica hacia otros sectores (fosfatos, yesos, mármoles, brillantes, oro, fundición de hierro e industria mecánica) y orientado a la reducción de la dependencia de la pesca y del mineral de hierro, y la aplicación de reformas para mejorar la competitividad del sector privado de la economía y atraer a los inversores extranjeros, la privatización de las empresas públicas, el control de la explotación de los recursos pesqueros, la liberalización del comercio exterior, la flotación del tipo de cambio y la convertibilidad de la moneda nacional. Debe decirse que la dirección de la economía ha sido valorada positivamente por los organismos y observadores internacionales; en la medida en que ha logrado resultados favorables en materia de control de la inflación, el déficit fiscal, la reforma del sector financiero, la promoción de la inversión privada y la lucha contra los niveles de pobreza extrema.

Pero al análisis por países de la situación económica no excluye que amplíemos nuestra visión del Magreb hacia otras dimensiones extraeconómicas o sociales como las que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) contempla en su concepto de desarrollo humano (1). En efecto, muy brevemente, podemos afirmar —teniendo en cuenta algunos de los principales factores definitorios del concepto de desarrollo relativos a la educación (tasas de alfabetización y de analfabetismo), la salud (tasa de mortalidad infantil y número de médicos por habitante), los equipamientos sociales (acceso de la población al agua potable) y la promoción de la mujer (grado de acceso de la población femenina a la educación y analfabetismo)— que Túnez y Libia destacan por los más

(1) El PNUD considera que el propósito final del desarrollo es expandir la capacidad de la población para "ganarse la vida", posibilitarle el cultivo de sus talentos e inquietudes, aumentar sus habilidades profesionales y humanas y darle la oportunidad de vivir con dignidad y autoconfianza. Los medios para alcanzar tal propósito pueden ser diversos: aumentando el stock de capital físico, introduciendo nuevas tecnologías, cambiando las instituciones, promoviendo incentivos. Igualmente importantes y a veces aún más importantes, son las inversiones en capital humano —la provisión de educación y formación profesional, la creación de empleo y oportunidades para adquirir habilidades laborales, la existencia de la atención primaria de salud y una nutrición más adecuada, el gasto en investigación y la búsqueda de nuevas fuentes de información— (Véase Griffin y Khan, 1992, citado por Moghadam, 1998).

altos niveles relativos alcanzados, situándose Argelia en una posición intermedia, secundada a un nivel inferior por Marruecos, quedando relegada —a una posición muy alejada de los niveles promedio del Magreb— Mauritania en cualquiera de los índices de medición utilizados. Más concretamente, es evidente que —con independencia de que todos los países del Magreb deban todavía hacer un largo y prolongado esfuerzo en el tiempo para elevar sus niveles de desarrollo humano— Marruecos y Mauritania tienen que acrecentar las inversiones educativas y sanitarias —concentrándolas, muy especialmente, en la población femenina—, y Libia y Argelia deben estimular la participación de la mujer en la vida laboral.

ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y FACTORES DE DESARROLLO

Una estructura socioeconómica poco diversificada, desarticulada y bloqueada

La estructura económica del Magreb tiene rasgos comunes, pero también profundamente diferentes. Es evidente que la posesión de petróleo permite establecer una tipología de los países árabes y, en consecuencia, de los países magrebíes (Lorca y Escribano, 1998). En efecto, los países magrebíes no petroleros (Marruecos, Mauritania y Túnez) presentan rasgos más comunes entre sí (mayor peso del sector agrario y de las manufacturas) que los países petroleros (Argelia y Libia) con potentes sectores energéticos y menor peso del resto de las ramas industriales.

El *sector agrario* es todavía muy intensivo en mano de obra, emplea una parte importante de la población activa (aproximadamente la mitad en Marruecos y Mauritania y casi un tercio en Túnez), no logra incrementar sus reducidos niveles de productividad (por problemas de concentración de la tierra en pocas manos y absentismo, falta de recursos hídricos, insuficiente capitalización de las explotaciones, bajo nivel técnico de los agricultores), tiene un carácter dual (una parte está orientada a la exportación —productos hortofrutícolas—, dispone de tierras irrigadas y es más productiva; otra parte —agricultura tradicional— sirve al mercado interno, está expuesta a las incidencias climáticas y es poco productiva) y, finalmente, su capacidad productiva es limitada, irregular e incapaz de satisfacer las demandas alimentarias (cereales y productos ganaderos) de una población en rápida expansión y crecientemente urbana. En consecuencia, el recurso a las importaciones de cereales y otros bienes alimenticios

es inevitable (Crespo, 1999). El subsector pesquero —fundamentalmente en los bancos costeros marroquí y mauritano— representa un importante sector productivo y exportador, está experimentando en los últimos años una reducción de las capturas —en el caso marroquí— como consecuencia de la sobreexplotación de los años 80 (lo que obliga a una extensión de dos a cuatro meses el período de descanso o pausa pesquera) y sufriendo reducciones de la renta de exportación (por descenso de precios), está tratando de desarrollar un cada vez mayor número de “joint ventures” con socios extranjeros y, en el caso del gobierno de Rabat, no está dispuesto a renovar en las actuales condiciones el acuerdo pesquero con la UE que ha expirado a comienzos del año 2000.

El sector *industrial* exhibe —como ya se ha dicho— una doble faz. Por un lado, cabe observar una industria orientada hacia el desarrollo de los sectores manufactureros (Marruecos y Túnez) y, por otro, se está en presencia de una industria cuyo centro de gravedad gira fundamentalmente en torno a la explotación de las fuentes energéticas de los hidrocarburos y el gas natural (Argelia y Libia). Mauritania adolece de un sector manufacturero ínfimo y solamente la minería del hierro tiene una cierta entidad productiva y exportadora.

El desarrollo de la industria manufacturera se está viendo estimulado por un proceso de privatización —todavía incipiente—, la promoción de la inversión —especialmente de procedencia extranjera— y la búsqueda de una mayor presencia en los mercados exteriores; a través del progreso técnico, la cualificación de la mano de obra y de los niveles de productividad, así como del aumento de la calidad de los productos y su adecuada comercialización. La meta no es otra que incrementar los niveles de competitividad de las empresas manufactureras magrebíes en los mercados de la Unión Europea, para hacer frente a los desafíos de los acuerdos de libre comercio. Esto es lo que realmente se persigue con los actuales programas de modernización industrial (llamados de “mise à niveau”), puestos en marcha por los gobiernos marroquí y tunecino. En todo caso, estos programas deberán tener en cuenta: a) que el desarrollo del sector es fuertemente dependientes de las importaciones de bienes de capital, piezas de repuesto y materias primas procedentes de los países desarrollados; b) que sus especializaciones productivas —en las ramas de la agroalimentación, los textiles y los fertilizantes químicos— a pesar de su crecimiento reciente, pueden sufrir problemas de mercado, al ser sectores de demanda media o débil; y c) que deberán buscarse, en consecuencia, nuevas oportunidades de diversificación e integración

productivas —a través de alianzas de mercado, acuerdos de fusión, atracción de capital foráneo— para formar un tejido industrial cada vez más complejo y completo.

La industria energética —heredera de un gravoso legado de centralismo estatal e ineficiencia productiva (todavía bien presente en la actualidad)— ha estado experimentando una transformación en su composición (sobre todo en Argelia) en virtud de la cual el petróleo ha perdido peso en beneficio de la producción de gas natural y gas licuado, debe superar los efectos de las sanciones de las Naciones Unidas y Estados Unidos (en el caso de Libia) en materia de obsolescencia de las plantas y pérdidas de productividad, necesita incorporar nuevas tecnologías de prospección y extracción, y proseguir el esfuerzo de incorporación de la iniciativa extranjera mediante la extensión de contratos con compañías internacionales y el aumento de la confianza en la inversión - país mediante la reducción del riesgo político.

El *sector de los servicios* está constituido por un variado “cajón de sastre” de múltiples actividades de muy reducida productividad relacionadas con el comercio y la restauración, los transportes y las comunicaciones, la banca y los servicios públicos. Una parte, no pequeña, obedece a los presupuestos de una economía informal urbana (intermediación comercial y servicios personales); otra parte, no menos importante, está vinculada a un Estado “sultanista” burocrático inspirado en objetivos más rentistas o clientelistas que en metas favorecedoras del desarrollo económico (servicios públicos); y otra, en fin, también unida al sector público, por anteriores procesos de nacionalización, sujeta a fuertes relaciones de control y regulación estatal (transportes, comunicaciones e intermediación financiera). Obsérvese que la aparente terciarización del Magreb podría caracterizarse por tres rasgos que se entrelazan sin solución de continuidad: la subterciarización propia de economías que no han resuelto todavía los problemas de almacenamiento, el transporte y la comercialización de productos; la hiperterciarización improductiva y parasitaria derivada del sobredimensionamiento de las actividades estatales y paraestatales; y la infraterciarización inherente a la inexistencia o insuficiencia manifiesta de oferta de servicios a las empresas (asesoría, consultoría y otros) tan necesaria para el desarrollo del tejido productivo. Dada la importancia de los mismos en todo proceso de desarrollo económico, centrémonos, a continuación, en cuatro subsectores claves para el futuro del Magreb: el turismo, los transportes y las comunicaciones, las finanzas y la administración pública.

El *turismo* (concentrado en Marruecos y Túnez) se está recuperando en los últimos años —después del retroceso experimentado como conse-

cuencia de la “guerra del golfo”, el terrorismo islamista y la reacción internacional—, representa un sector clave como generador de divisas y creador de empleo, posee factores de atracción importantes (exotismo, patrimonio histórico, diferenciación cultural, sol, playa, nuevos productos, oasis y desierto), y viene recibiendo últimamente participaciones extranjeras que mejoran su capacidad de gestión y el servicio al cliente. Sin embargo, adolece todavía de una insuficiente base hotelera y de infraestructuras y servicios de calidad, los niveles de ocupación de los establecimientos y los ingresos medios por turista son bajos, el envejecimiento de la oferta —por falta de inversión de reposición— es importante, el nivel de diversificación a pesar de las oportunidades es reducido, y las ventajas en precios se están viendo fuertemente erosionadas por la competencia. La conjunción de esfuerzos entre los sectores privado (extranjero y nacional) y público puede resultar decisivo en la promoción comercial y en la búsqueda de nuevos mercados, la mejora de la infraestructura de transportes y del entorno medio ambiental, y en la creación de un clima favorable al desarrollo de la actividad (formación de la mano de obra, clasificación de los centros turísticos, control de calidad y en fin, la siempre imprescindible seguridad exigida por el consumidor de turismo) (Lorca y Escribano, 1998).

Los transportes y las comunicaciones no están a la altura de los requerimientos de una economía moderna y representan al día de hoy un obstáculo muy serio, que está hipotecando las oportunidades de desarrollo de la región. La revolución en los sistemas logísticos y los avances en la integración de los diferentes modos de transporte, la cada vez mayor movilidad de factores y productos y los progresos en los campos de la telemática y la transmisión de la información permiten minimizar los stocks, disminuir enormemente los costes de transporte, y despachar las mercancías con puntualidad y en perfecto estado de calidad. El Magreb deberá proceder sin mayores dilaciones a una mejora sustancial de sus servicios de transporte (terrestre, aéreo y marítimo), atraer la inversión extranjera hacia los necesariamente grandes proyectos de inversión (particularmente, las autopistas), privatizar los monopolios nacionales del sector en el contexto de liberalización y desregulación de los actuales mercados del transporte, prestar una atención prioritaria al transporte urbano que condiciona grandemente el logro de economías de aglomeración en las ciudades y poner al día la red de telecomunicaciones a través de la instalación de los sistemas digitales y de fibra óptica para no incurrir en desventajas competitivas que afecten al funcionamiento del conjunto de la economía.

Las *finanzas* se organizan sobre la base de una herencia cargada por una deficiente gestión y una constante interferencia política propia de una banca estatalizada, la progresiva presencia actual de los bancos internacionales, la apertura hacia una mayor liberalización del mercado de divisas, la adopción de medidas de regulación o prudencia financiera, en consonancia con las de una banca moderna (niveles de provisiones, ratios de suficiencia financiera, papel supervisor del banco central y otras) y la mayor actividad del mercado de capitales (Bolsas de Casablanca, Túnez y Argel). No obstante, todavía se hace esperar la convertibilidad del dirham marroquí como lo ha hecho el dinar tunecino, el desarrollo del todavía reducido subsector de los seguros y una mayor competencia interbancaria que permita una mejora de los servicios prestados y una disminución de los tipos de interés (teniendo en cuenta las necesidades de las PYME y de las microempresas). A lo que hay que añadir la necesidad del aumento del stock de liquidez, del número de empresas cotizantes, así como de las oportunidades de inversión en bolsa, que a su vez están condicionadas por la evolución del programa de privatizaciones, la resistencia de las empresas nacionales a acudir al mercado de capitales y la atracción de las empresas extranjeras. No se puede olvidar tampoco que la puesta en marcha del euro influirá sobre los regímenes de tipo de cambio del Magreb, emplazando a los diferentes países ante la opción de “anclaje” o no “anclaje” nominal al euro (Femise, 1999).

Las *administraciones públicas* magrebíes —herederas directas de todos los defectos del Estado francés de la primera mitad del siglo que acaba— han desarrollado de manera exagerada la creación del empleo público y en los sectores para-administrativos en detrimento de la creación de empleo en los sectores directamente productivos. Un nuevo puesto de trabajo en la administración no resulta, en general, de un estudio serio que justifique su necesidad. Surge esencialmente de la relación de fuerzas existente entre los responsables de la administración pública y los encargados de los diferentes ministerios demandantes. Si los primeros están poco motivados —que es lo que suele suceder— para hacer una gestión rigurosa del dinero del Estado, los segundos bien al contrario están fuertemente interesados en aumentar su influencia, su clientela y su prestigio. Esa es una de las causas del crecimiento espectacular del número de funcionarios que, por ejemplo en Argelia, representa casi un tercio de la población ocupada total (BEDRANI Y ELLOUMI, 1998). Es evidente, pues, la necesidad de una reforma del conjunto de las administraciones públicas, que transforme —en un sentido menos burocrático, más funcional y eficiente— el sistema organizativo y administrativo del Estado.

Factores de desarrollo necesitados de fuerte potenciación

El análisis de la capacidad de producción del Magreb requiere un conocimiento lo más exacto posible de los factores productivos. Aquí trataremos los siguientes: la población y el empleo, los recursos naturales, las infraestructuras, la tecnología y los empresarios. Además, dada su importancia en el contexto de la región magrebí, este estudio tendrá en cuenta algunas condiciones limitantes de los mencionados factores en el desarrollo, como son las relativas al éxodo rural versus el crecimiento de las ciudades, la insuficiencia alimentaria versus la nutrición, el papel de la mujer en las economías árabes y la falta de recursos hídricos.

Población y empleo: urgencia de la mejora del capital humano

El tratamiento de la población seguido aquí se basa en el nuevo enfoque adoptado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Población de El Cairo (septiembre de 1994), que tiene en cuenta el entorno educativo, sanitario, nutricional, cultural, territorial y de “genero” de un determinado espacio geográfico más allá de la simple consideración de las tasas agregadas de natalidad y mortalidad. En efecto, la percepción del crecimiento de la población magrebí se ha modificado en los últimos años y ha pasado del pesimismo (crecimiento explosivo) a un cierto optimismo demográfico (caída considerable de la tasa de fecundidad), debido a los efectos sobre el crecimiento vegetativo —entre otros factores— de los niveles de instrucción, la mayor participación de la mujer en la esfera laboral, la creciente urbanización y la influencia del modelo occidental de familia restringida.

En este mismo sentido, los datos más recientes parecen mostrar que asistimos ya a una significativa desaceleración del crecimiento demográfico en el Magreb, pues existía una sobreestimación de las tasas de fecundidad (Courbage, 1997); aunque es innegable que los niveles alcanzados de estabilización de la población y su potencial de crecimiento son todavía bastante elevados. A pesar de que los gastos presupuestarios de los gobiernos en materia educativa y sanitaria han sido importantes, las tasas de *alfabetización y formación profesional* de la población así como las posibilidades de acceso a los servicios de salud —sobre todo en el medio rural— permanecen todavía a unos niveles muy bajos. La situación de Marruecos —en comparación con los restantes países del Magreb, a excepción de Mauritania— es la que presenta peores registros, no sólo en términos de niveles de alfabetización, sino también en las tasas de matri-

culación (tanto en enseñanza primaria como secundaria, sobre todo de las mujeres) y en el porcentaje de gastos en educación sobre el Producto Nacional Bruto. En este punto Túnez muestra un camino a seguir, tanto en términos cuantitativos como cualitativos (reforma de secundaria, reforzando las enseñanzas técnico-científicas y de gestión empresarial); si bien, la enseñanza superior ha mejorado sus instalaciones pero ha olvidado la calidad de los currícula y la formación del profesorado.

Los niveles de *salud* han mejorado considerablemente (esperanza de vida, mortalidad infantil, acceso a los servicios sanitarios), aunque aquí también Marruecos presenta peores resultados, especialmente en lo relativo a las desigualdades entre el rural y la ciudad, que son todavía enormes. En estas condiciones, el éxodo rural es una consecuencia tan inevitable como el crecimiento rápido y desordenado de las ciudades. Ciertamente, el proceso de urbanización es irreversible (la tasa de urbanización o porcentaje de población urbana sobre la población total pasará de 57,4% en 1995 a 61,5% en el año 2015), pero con un ritmo de evolución en desaceleración, pues las tasas estimadas de crecimiento de la población urbana del período 1970-1995 se reducen fuertemente en los años 1995 a 2015. Aunque ello no impide que las ciudades mayores de 750.000 habitantes sigan siéndolo cada vez en mayor medida. Esto implica una demanda en aumento de vivienda para los nuevos habitantes urbanos y para los que ya lo eran (pero sin vivienda digna); así como de puestos de trabajo, alimentación y servicios sanitarios, educativos y de agua potable. Sin embargo, en este terreno los desajustes entre oferta y demanda son patentes en las ciudades, aunque todavía más en el mundo rural. El problema de la pobreza aparece así en primer plano.

La *pobreza* es una “realidad de múltiples caras” (Femise, 1999). Al lado de una pobreza “clásica”, caracterizada por condiciones de vida materiales miserables, se desarrolla una pobreza “moderna” de origen más reciente, ligada al éxodo rural y a los cambios estructurales derivados de las modificaciones en la asignación de los recursos (básicamente la pérdida de peso de la agricultura y la intensificación de los cultivos, la presión demográfica y el aumento de la tasa de actividad femenina, la disminución del papel del Estado como empleador y la limitación de las ayudas sociales). Esta pobreza “moderna” es claramente de carácter urbano, se caracteriza por la exclusión de una buena parte de la población (en torno a un 20% de la misma, si se establece el umbral de la pobreza en 50\$ de ingresos por mes) del mercado de trabajo, de la sociedad de consumo, de la vivienda y de la legalidad (informalidad urbana, criminalidad, delincuen-

cia y droga), que le lleva al aislamiento, a la formación de espacios de marginalidad y de “guetos”. Estos niveles de pobreza pueden medirse en términos de renta per cápita (y de su distribución), pero también —como hace el PNUD— en niveles de desarrollo humano versus pobreza humana. Las posiciones de los países del Magreb no son, a este respecto, nada halagüeñas (ver PNUD, Informe sobre el Desarrollo Humano, 1995). También aquí, en relación a la pobreza, las mujeres llevan la peor parte: las mujeres pobres son más pobres que los hombres. Es lo que se conoce como “feminización de la pobreza”, debido a que los niveles de ingresos son menores y los de desempleo mayores para las mujeres pobres que para los hombres, tanto en las ciudades como en el campo (World Bank, 1994 y 1995).

Por otra parte, la baja en las tasas de fecundidad, que influye sobre la disminución del tamaño medio de la familia, tiene un efecto sobre la reducción de las diferencias sociales entre ricos y pobres, en el descenso de los niveles de pobreza (Cered, 1989), en una menor demanda de la mujer en las tareas de crianza de los hijos y en su mayor participación en las actividades laborales. Conviene, pues, que nos detengamos —siquiera brevemente— en señalar algunos rasgos del papel de la mujer como fuerza de trabajo en las economías del Magreb. De acuerdo con estudios recientes (Moghadam, 1998), la subutilización de la población femenina y las diferentes formas de segregación por razones de género —como es el caso del Magreb— ocasionan una ineficiente asignación de los recursos humanos, representan un obstáculo al desarrollo económico y, en consecuencia, provocan una pérdida de bienestar para el conjunto de la sociedad.

Pues bien, en los casos de Marruecos y Túnez —que son los países, en la actualidad, que han ido más lejos en el proceso de liberalización económica y de integración en la economía global— se puede observar que la apertura al exterior ha conducido a una mayor participación de la *mano de obra femenina* —asalariada y, sobre todo, no asalariada— en la industria manufacturera de exportación (textiles y confección, cuero y agroalimentación, básicamente); aunque también en los puestos de trabajo informales de autoempleo, trabajos a tiempo parcial, empleos domésticos y artesanos e incluso en trabajos familiares no pagados (como venía siendo tradicional en la agricultura). En el caso de Argelia (no disponemos de estudios para Libia y Mauritania), y a pesar del fuerte contenido patriarcal y patrimonial de la familia y de la presión islamista que sostiene que un puesto de trabajo de una mujer es un puesto de trabajo quitado a

un hombre, la participación laboral de la mujer —aún siendo menor que en Marruecos y Túnez, dado el peso de la industria pesada en el país— es cada vez mayor como forma de buscar un ingreso para hacer frente al crecimiento del desempleo y de los precios, al deterioro de los salarios y a la eliminación de los subsidios estatales. El crecimiento de la fuerza laboral femenina en Argelia se ha dado sobre todo en los servicios públicos (educativos, sanitarios, administrativos) y profesionales (debido a su mayor nivel de instrucción), siendo previsible también su incremento en el futuro a medida que la economía se diversifique hacia otros sectores exportadores e intensivos en empleo.

Territorio, recursos naturales y medio ambiente: ineludible protección

El enorme espacio territorial del Magreb —Argelia es el segundo país mayor de África y Libia el cuarto, después de Sudán y del Congo Kinshasa— contrasta con la reducidísima franja costera mediterránea y atlántica donde se concentra la mayor parte de la población (urbana) y de la actividad económica, estando el resto de la superficie ocupada por montañas y desierto. Aquí la geografía física (muy especialmente el clima y los suelos) condiciona —como en muy pocos lugares— la geografía humana y económica: la superficie útil es muy reducida, los terrenos son poco fértiles, las precipitaciones bajas e irregulares, las sequías frecuentes, el agua escasea, el suelo es árido cuando no desértico y, por tanto, la productividad agrícola es baja. Ciertamente, el Magreb es rico en recursos naturales: fosfatos en Marruecos y Túnez; petróleo y gas natural en Argelia, Libia y Túnez; pesca en Marruecos y Mauritania; aunque no hay que dejarse llevar a engaño, pues las limitaciones de los modelos de desarrollo basados en la explotación exclusiva de los recursos naturales son, a estas alturas, de sobra conocidas (Sid Ahmed, 1989).

Ahora bien, el entorno físico-ecológico magrebí está seriamente amenazado por la utilización abusiva de los recursos naturales, por los procesos de industrialización y urbanización, por la falta de conciencia medio ambiental y la insuficiencia de los sistemas de gestión aplicados. En este sentido, parece oportuno afirmar que no es la falta de suelo cultivable sino la escasez de agua (2), lo que representa y representará todavía más en el futuro el obstáculo principal al desarrollo magrebí. El incremento de la

(2) Convendría matizar que el problema de la escasez del agua no se plantea tanto del lado de su potencial, propiamente dicho, como de su gestión ineficiente. Véase Côte, 1998.

demanda de agua está estrechamente vinculado a la intensificación de la agricultura exportadora de regadío, a las necesidades industriales y energéticas, al crecimiento demográfico y a la hipertrofia del sistema de ciudades litoral-costero. La época de gestión de la oferta (política hidráulica basada en la construcción de grandes pantanos) debe ceder definitivamente el paso a la gestión de la demanda, que permita economizar el consumo agrario y urbano de los recursos hídricos.

La desertificación —reducción más o menos irreversible de la cubierta vegetal— es el resultado no sólo de factores climáticos que ocasionan sequías recurrentes más o menos duraderas, sino también de factores antrópicos asociados a la presión demográfica sobre el suelo (consecuencia, a su vez, del desempleo y al subempleo en los sectores no agrarios de la economía), a la fuerte orientación hacia la ganadería extensiva y al excesivo pastoreo y al abandono inversor del Estado en la lucha contra la pérdida o el empobrecimiento de la base vegetal del territorio (Bedrani y Elloumi, 1998).

Recursos tecnológicos: un serio desafío

La industrialización sin progreso técnico —como es el caso del Magreb—, compitiendo exclusivamente vía precios, conduce inevitablemente al descenso en los salarios reales para mantener el margen de beneficios en el valor añadido, a la incapacidad de ampliación del mercado doméstico y a la falta de incentivos de promoción de las industrias más dinámicas e innovadoras. En este contexto, la apertura actual del Magreb a partir de un enfoque competitivo —que permita, con ganancias de productividad, aumentar los salarios sin disminuir los beneficios— convierte a los sistemas nacionales de ciencia y tecnología, investigación y desarrollo, en piezas centrales de los recursos productivos (Sid Admed, 1998).

Sin duda, este es un planteamiento que representa un serio desafío (y una gran ambición) para los países del Magreb, frente al cual deben salir airosos si quieren situarse en la senda del desarrollo a medio y largo plazo en este umbral del nuevo siglo. Ello exige la superación de pasados fracasos en las políticas de transferencia de tecnología (Mella, 1999) mediante su inserción real en el tejido productivo local, la vinculación del sistema científico y tecnológico a las necesidades industriales de los países, el aumento del prestigio y el reconocimiento social de la formación en carreras técnicas y de ingeniería, y en fin, la superación de la dificultad para pasar de la investigación aplicada al desarrollo industrial (Daguzan, 1998).

Infraestructuras de transportes y comunicaciones: reclaman inversiones

La evolución del transporte de personas y mercancías en el Magreb muestra que está dominada por los modos de transporte terrestre, fundamentalmente por la carretera. A su vez, la red de carreteras crece a una tasa anual —en el entorno del 5%, en cualquiera de los países analizados—, muy inferior al ritmo de crecimiento del tráfico (alrededor del 9%), sufre una degradación continua por factores naturales y un deterioro progresivo en la calidad de la oferta debido al volumen creciente de motorización de la circulación y de la concentración de la demanda en las zonas urbanas costeras mediterráneas y atlánticas. Las expectativas futuras están condicionadas por la elasticidad de la demanda (3): los datos indican que la demanda de transporte crecerá todavía a un ritmo mayor que el conjunto de la economía de los diferentes países. El déficit en infraestructuras de transportes terrestres será, por tanto, un hecho, si la oferta pública (y privada) en este campo no crece a un mayor ritmo que el PNB. Y, dado el carácter estratégico de las mismas en los flujos de bienes y personas, convendrá que los agentes públicos y privados estén a la altura de las necesidades para evitar estrangulamientos en el funcionamiento eficiente del sistema productivo.

En este mismo sentido, el desarrollo de la economía de la información en el Magreb requiere una adecuada infraestructura de telecomunicaciones (internet, telefonía, transmisión de datos, ...) y la introducción de las nuevas tecnologías de la comunicación en la vida cotidiana. Sin embargo, la situación actual está caracterizada por una información escasa, desactualizada y concentrada en las grandes ciudades; por unas infraestructuras claramente insuficientes (baja densidad de teléfonos, reducidísima penetración telefónica en las regiones rurales, ineficacia de los servicios), y por la inexistencia de comunicaciones directas entre los diversos países, que se ven obligados a relacionarse entre ellos a través de los países del norte con los consiguientes sobrecostos (Saoud, 1997).

(3) La elasticidad de la demanda mide cuanto varía ésta cuando crece un 1% el PNB. Las elasticidades de los cinco países del Magreb se situaban, en 1974, en un intervalo del 1,85 (Túnez) y 2,30 (Mauritania) y, en 1994, entre un 1,50 (Túnez) y 2,25 (Mauritania) siendo, para este año, 1,70 (Argelia), 1,45 (Marruecos) y 2,10 (Libia). En el caso de los países europeos, estas elasticidades o son unitarias o menores que uno. Véase Ammons, 1997.

Empresas y empresarios: renovación y cooperación

Las empresas magrebíes —ante el entorno actual de mayor competencia internacional— sufren una importante erosión en sus anteriores ventajas relativas (el menor coste de la mano de obra, la disponibilidad de ciertos recursos naturales, agrícolas y otros, y la proximidad geográfica del mercado europeo), dado que han aparecido países emergentes competidores del Magreb con menores costes laborales (China y Tailandia, por ejemplo), las materias primas han perdido el carácter decisivo de antaño como factor de competitividad y los costes de transporte por unidad de producto han descendido por mejoras tecnológicas. Además, el tejido empresarial —especialmente el formado por los sectores manufactureros— adolece de debilidades estructurales serias de diversa naturaleza: estratégicas (ausencia de una visión a medio plazo, enfoque competitivo clásico basado en la explotación de los costes), productivas (gestión tayloriana, controladora o rígida de la fuerza de trabajo, no delegación de responsabilidades, falta de diálogo y concertación, muy insuficiente fiabilidad contable y de control de costes, reducido nivel de tecnificación y de formación de los recursos humanos), de entorno (costes elevados de orden financiero y fiscal, de infraestructuras de transportes y equipamiento inmobiliario, de la energía, juntamente con la inexistencia de adecuados servicios a las empresas y la lentitud burocrática de las relaciones con la administración) y comerciales (desatención a las necesidades del mercado y a su segmentación, a la calidad de los productos, al prestigio de las marcas, y estrechez de la demanda interna) (Said Saadi, 1996, El Kaouachi, 1996).

En la perspectiva del modelo de partenariado euromediterráneo planteado en la Conferencia de Barcelona, los empresarios magrebíes presentan un doble perfil. Por un lado encontramos el predominio del empresario rentista (temeroso de la competencia externa, acusador del Estado por su falta de apoyo y propenso a invertir sus recursos en otros activos más seguros y rentables, como los inmobiliarios) y, por otro, están los empresarios que sostienen la capacidad competitiva y exportadora de algunos sectores (textil, agroalimentación, turismo, ...) y que aparecen como una nueva clase empresarial, todavía no consolidada —con orígenes en los cuadros superiores de la administración y la empresa pública, y titulados universitarios en las escuelas de ingenieros y de administración empresarial— caracterizada por su capacidad de gestión, organización e innovación, y dotados de una lógica modernizadora, profesional y abierta al exterior (Tangeoui, 1998, Denieuil y Bíchir, 1998). Es evidente que el

futuro empresarial del Magreb depende de la consolidación de este segundo tipo de empresarios y de las alianzas entre ellos, de la superación de las debilidades de entorno anteriormente mencionadas y del éxito de las políticas industriales llevadas a cabo por los correspondientes gobiernos.

DEL LIBRECAMBIO AL DESARROLLO: UN LARGO CAMINO POR RECORRER

Como es sabido, los acuerdos de libre comercio entre Marruecos y Túnez (4) con la UE consisten básicamente en la eliminación total de las restricciones que todavía subsisten al libre acceso de las exportaciones industriales magrebíes al mercado europeo, el desarme tarifario gradual —reducido al principio, pero más intenso después, desde principios del nuevo milenio hasta el año 2010— de las importaciones industriales procedentes de la UE y la llamada “excepción agrícola” en virtud de la cual los intercambios de este sector no entran en el marco del libre comercio, debiendo replantearse nuevamente sus condiciones de acceso en el año 2000. Los efectos de estos acuerdos, a modo de “shock” externo se apreciarán a medio plazo en cuatro campos distintos: el cambio presupuestario, la oferta productiva, el ajuste social y la relación Sur-Sur (Femise, 1999).

El efecto estático del cambio presupuestario es una pérdida directa de ingresos fiscales por el mismo valor que los derechos aduaneros suprimidos. Sin embargo, el efecto total es diferente e implica una sustitución fiscal (el derecho suprimido puede beneficiar al productor por disminución de costes e incremento del margen y/o al consumidor vía reducción del precio) y una reacción de adaptación de los agentes económicos durante el período previo de cuatro años hasta que los derechos desaparecen. En un estudio realizado para el caso de Marruecos (CMC, 1998) se estima que el impacto del desmantelamiento tarifario se produce en los sectores menos productivos fiscalmente, el efecto presupuestario es/será por tanto relativamente débil (5) (aunque más acusado durante los primeros años) y el efecto favorable sobre las empresas exportadoras representa un claro

(4) El acuerdo con Argelia sigue en proceso de negociación. Libia y Mauritania no se han planteado la realización de tal acuerdo, aunque por razones distintas.

(5) En el caso de Túnez, el efecto no será tan débil, debido a que la proporción de las importaciones procedentes de la UE y el porcentaje de derechos aduaneros sobre las mismas son mayores.

factor compensador de la pérdida fiscal. En consecuencia, se necesita una política sectorial de mejora de la oferta exportable y una reforma fiscal que reajuste la estructura de los ingresos públicos vía aumento de la imposición directa e indirecta (impuesto sobre el valor añadido, IVA, e impuesto sobre la renta de las personas físicas) y, sobre todo, por la mejora de la eficiencia del sistema tributario (6).

Los efectos sobre la oferta son los más importantes a largo plazo, debido al nuevo contexto de mayor presión competitiva que se materializará en términos de reducción de costes, racionalización de los sistemas de producción, necesidad de ganancias de productividad y búsqueda de nuevos mercados. En este sentido, habrá que tener muy en cuenta que sobre el mercado europeo compiten también fuertemente los países asiáticos y los PECO (países de Europa Central y Oriental), que coinciden con los países magrebíes en los mismos sectores y con niveles de costes y productividad semejantes. Esto implica que la competitividad no costeará un papel decisivo, de manera que deberá presentarse una gran atención a la calidad/diferenciación/diseño de los productos, a la capacidad tecnológica y de innovación de los procesos productivos y a la mejora de las redes de distribución comercial en términos de mayor fiabilidad y menor tiempo de respuesta a las demandas del mercado.

Los efectos sobre la oferta productiva variarán en función de los sectores, de su grado de apertura previa y de su nivel de competitividad. Los sectores más expuestos a la competencia de los productos, procedentes de la UE son los que han estado más protegidos, aunque los más perjudicados serán aquellos que carezcan de ventajas comparativas (papel, vehículos industriales, pieles curtidas), frente a los que las posean (hilados, calzado de cuero, plásticos, bebidas, material eléctrico, industrias metálicas) que podrán aprovechar las ventajas de la apertura al exterior. Existen también actividades competitivas (agroalimentaria y fertilizantes) que soportarán bien la competencia y no competitivas (bienes intermedios) poco protegidas que podrán verse afectados en cierta medida.

El ajuste social está condicionado por la caída de la población activa agraria (aparejada al cambio estructural provocado por la apertura exterior) en beneficio de la extra-agraria (industria y servicios), el incremento

(6) La vía del incremento del IVA tiene sus limitaciones. La primera es que difícilmente en un contexto de liberalización, el gasto aumenta. La segunda es que el incremento del IVA puede perjudicar a la actividad económica privada.

de la tasa de actividad femenina, la presión del desempleo urbano en el mercado de trabajo, el incremento de la marginalidad y la pobreza en las ciudades, la tendencia a la baja del empleo público y el desplazamiento del empleo hacia las actividades más favorecidas por el proceso de liberalización económica.

Un cuarto efecto del acuerdo de librecambio —en este caso, de carácter potencial— es la posible intensificación de las relaciones comerciales horizontales Sur-Sur. La debilidad actual de los intercambios intramagrebíes —que deja un margen todavía muy amplio de expansión— y la evolución observada en otros procesos de integración, con ciertos perfiles similares (Mercosur y Sudeste Asiático) permiten pronosticar la intensificación futura del comercio manufacturero magrebí, lo que convertirá al mercado interno en un importante factor, nada despreciable, en términos de desarrollo económico.

El coste del no Magreb es cada vez más evidente

La asociación de librecambio euromediterránea ha planteado de nuevo (7) la cuestión de la integración económica del Magreb y de los costes de su no integración (8). Ciertamente, en el actual contexto de globalización y regionalización de la economía mundial (Mella, 1997), la unidad del Magreb se convierte no solo en una condición necesaria para la profundización de la integración euromediterránea, sino también resulta fundamental en el proceso de subintegración regional en el seno de la región euromediterránea (Regnault, 1998). Las razones de tal supuesto descansan en la necesidad de superación de la enorme fragmentación del mercado interno, incapaz de incentivar y atraer tanto al capital nacional como al extranjero, en la importancia de alcanzar una mayor dimensión económica (en el año 2000 la población del Magreb se elevará a 80 millones de habitantes) con las correspondientes ganancias de escala vía desaparición de las fronteras, en el aumento de la capacidad de innovación regional al reducir los costes medios de las actividades de I+D (investigación y

(7) Con anterioridad ha habido diferentes intentos fallidos, o con resultados muy modestos por diferentes razones, en torno a la constitución de la Unión del Magreb Árabe, pero ello no invalida en la hora actual la necesidad de una mayor integración de los países magrebíes (Lorca y Escribano, 1998; Mahiou, 1998).

(8) Véase el dossier sobre perspectivas euromediterráneas y el coste del no Magreb en L'Annuaire de la Méditerranée, 1998, pp. 91-232.

desarrollo) e incrementar las externalidades tecnológicas, en la estandarización de las legislaciones nacionales para adaptarlas a los nuevos regímenes de política comercial y a las actuales políticas de “mise à niveau” (o de competitividad), y en la imprescindible existencia de una voluntad política común para enfrentar el desafío del librecambio y de la cooperación euromediterránea.

No obstante, debe aclararse de inmediato, como cuestión fundamental a tener en cuenta y previa a cualquier diseño de política económica, que la creación de una zona de libre cambio no asegura por ella misma ningún proceso de industrialización y desarrollo, si bien puede estimular mejoras de eficiencia en la asignación de los recursos productivos (Sid Ahmed, 1995).

En fin, nótese que la apuesta del librecambio sitúa a los países del Magreb en un nuevo escenario extraordinariamente exigente (en materia de cambios económicos, sociales, políticos y culturales) en el que la siempre presente cuestión del desarrollo económico se plantea como telón de fondo. Sin embargo, el paso del librecambio al desarrollo no es inmediato, implica un largo camino a recorrer, y exige la puesta en práctica de políticas coherentes y ambiciosas.

PERENTORIEDAD DE POLÍTICAS CON AMBICIÓN DE FUTURO

La necesidad de cambio en el Magreb implica un ambicioso programa de reformas políticas (y de política económica), que no defraude una vez más las merecidas expectativas de mejora del nivel de vida de la población. Este programa, sin duda exigente en sus contenidos, se basaría en una amplia panoplia de políticas macroeconómicas, sectoriales y horizontales, que —a continuación— brevemente se exponen.

Las economías del Magreb deben esforzarse en crear sus propias ventajas comparativas dinámicas; a través de la acumulación de capital físico, humano y tecnológico, lo que exige políticas orientadas a la inversión en equipamientos asociados a la difusión masiva de conocimientos y de tecnologías avanzadas. Esto es, las políticas macroeconómicas (comerciales, monetarias y financieras) deben subordinarse a las políticas sectoriales y horizontales, que persiguen el cambio estructural/social e institucional, hacen emerger las capacidades de aprendizaje e investigación, crean las condiciones para una mayor iniciativa empresarial y de los diversos actores sociales y, en definitiva, promueven la elevación del nivel de competitividad de las economías. Desde este punto de vista, los mecanismos de

mercado son insuficientes y se necesita un papel activo del Estado en el desarrollo de una masa crítica de recursos relativa a las infraestructuras de transportes y telecomunicaciones, las cualificaciones profesionales y las dotaciones científico-técnicas.

Advirtamos, sin embargo, que desde el punto de vista de las *políticas macroeconómicas*, el Magreb no es un conjunto homogéneo. Mientras Marruecos y Túnez han avanzado de modo notorio en el camino liberalizador de sus regímenes comerciales con el exterior, el resto de los países (Argelia, Mauritania y, sobre todo, Libia) se encuentran todavía muy alejado de una organización comercial abierta y moderna ajena a la tutela y al intervencionismo estatal (Escribano, 1998). En todo caso, como he señalado en otro lugar (Mella, 1997), el Magreb necesita “una política económica y comercial basada en un compromiso a largo plazo para evitar estrategias de sustitución de importaciones, que proporcione un entorno o marco en el cual las empresas nacionales —al experimentar la presión de la competencia— propendan a la realización de mayores ritmos de inversión que les permitan mejorar sus capacidades de producción, de innovación y de dirección empresarial”. Además, como ya se ha dicho más arriba, la pérdida de capacidad recaudatoria, provocada por una política comercial liberalizadora, debe compensarse con la realización de una reforma fiscal que restablezca el protagonismo de las figuras impositivas de una administración tributaria eficiente, equitativa y moderna.

Por otra parte, la *política financiera* se apoya —fundamentalmente en Marruecos y Túnez— en un sistema financiero sometido desde hace años a un proceso de reformas, tanto más importantes cuanto que el acceso al crédito y el coste del mismo representan el principal obstáculo para el crecimiento de las empresas (en especial de las pequeñas y medianas) (9). Ahora bien, esas reformas de carácter liberalizador —tanto del sistema bancario como de los mercados monetarios y de capitales— no están a la altura de las necesidades del desarrollo empresarial, por varias razones: la liberalización ha sido más ficticia que real en el sentido de que no ha estimulado una competencia orientada a la reducción de los tipos de interés, los márgenes de intermediación bancaria son excesivos, las garantías exigidas a las empresas prestatarias son leoninas y la banca domina en la bolsa y las empresas no financieras se muestran reticentes para participar en esta última por temor a la pérdida de control de sus compañías. En rea-

(9) Observatoire de L'Economie Marocaine, “Enquete aupres des entreprises”, Rabat, 1997.

lidad, lo que está sucediendo es que —tanto el gobierno como los bancos y las empresas— encuentran no pocas dificultades para adaptarse a las nuevas condiciones de mayor competencia (Jaidi y Zaim, 1998). Adaptación imprescindible para que el proceso de industrialización no se vea sometido a un serio cuello de botella, en un marco caracterizado por las restricciones financieras de un programa MEDA muy limitado y unas inversiones extranjeras con unos montantes a todas luces insuficientes para contribuir significativamente a la modernización económica del Magreb.

Mención aparte merece la “overhang debt situation” del conjunto de las economías, que requiere la revisión de los límites de las políticas preteritas de reestructuración y conversión de la deuda, la disminución del stock y el servicio de la misma a niveles compatibles con tasas de crecimiento más elevadas (7,8%) y duraderas, y la puesta en marcha de nuevos mecanismos de cooperación financiera internacional capaces de permitir una adecuada financiación de las políticas de desarrollo.

Desde el punto de vista de las *políticas sectoriales*, deberá tenerse en cuenta que la “excepción agrícola” va a experimentar sin duda modificaciones a partir del año 2000, tanto desde el lado de la PAC (Política Agraria Comunitaria) como del lado de los sistemas de protección vigentes en los países del Magreb. Es evidente que se impone una solución negociada por ambas partes (UE y países del Magreb), que busque un punto de equilibrio entre dos posiciones extremas: la autosuficiencia alimentaria (que implicaría el mantenimiento de los sistemas de protección cerealista en el Magreb y la sobre-explotación de unos recursos hídricos baratos) y la apertura total de los mercados europeos a los productos magrebíes (que crearía fuertes reacciones negativas de los agricultores de algunos productos hortofrutícolas, en especial de las regiones españolas mediterráneas). La alternativa no parece ser otra que una liberalización progresiva, que permita tener en cuenta los intereses de ambas partes para que en el necesario proceso de transición se lleven a cabo las reformas de las estructuras agrarias afectadas, en el sentido de la elevación de la productividad de las explotaciones, el incremento de la eficiencia en el uso del agua, la reducción de costes y precios, la diversificación productiva y la puesta en práctica de una mayor cooperación euromediterránea (empresarial, tecnológica y comercial) en materia agroalimentaria (Mella, 1999a).

La *política industrial*, en coherencia con los rasgos estructurales del sector ya expuestos, deberá estimular la competitividad de los factores de producción nacionales, crear un entorno favorable para el desarrollo de las empresas y definir una estrategia a medio plazo basada en criterios selec-

tivos de especialización/competitividad. Esta estrategia tendría por objetivos la promoción de “clusters” de actividad (10), capaces tanto de responder a la competencia internacional como de crear tejido industrial doméstico. Es evidente que el perfil de esta política es de un profundo calado, que requiere por definición un lugar central en el diseño de toda la política económica. La estabilidad del crecimiento económico del Magreb depende de un proceso de industrialización intenso y diversificado, que evite la dependencia de sus economías tanto de factores climáticos como del monopolio de los sectores energéticos. En consecuencia, la política industrial estará estrechamente vinculada a políticas horizontales (relativas al capital humano, los equipamientos tecnológicos, las infraestructuras económicas, la protección medioambiental y la promoción empresarial), que facilitan las mejoras de eficiencia de todo el sistema productivo.

La *política educativa*, dirigida a la valorización de los recursos humanos, concentrará su atención en la superación del grave problema de analfabetismo masivo (sobre todo, en el medio rural y entre las mujeres) mediante la generalización de la enseñanza primaria a toda la población, la mejora de la formación profesional para elevar el nivel del “saber hacer” de los trabajadores en el sistema productivo, el desarrollo de la formación y la recualificación en el puesto de trabajo, como instrumento de reciclaje permanente, y, en fin, el logro de una universidad de calidad con currícula adaptados a las necesidades (tecnológicas y de gestión empresarial) del mercado de trabajo y a las exigencias de excelencia en los campos de la enseñanza, la investigación y la cooperación científica internacional. Desde luego, el éxito de tal política descansa indudablemente en la formación permanente de los propios enseñantes, en la creación de una “cultura de empresa” (que vea a ésta no solo como un lugar de producción constantemente necesitado de nuevas competencias, sino también de diálogo y negociación, facilitando así la transición a una economía social de mercado), en la dinamización de los agentes sociales afectados (instituciones educativas, padres, profesores, alumnos, asociaciones empresariales y profesionales), en una gestión moderna y eficaz del sistema educativo y, en definitiva, en la disponibilidad de suficientes medios financieros tanto públicos como privados (11).

(10) Porter define los “clusters” o grupos de actividad, basándose en tres criterios: la capacidad de atracción de las inversiones extranjeras, las posibilidades reales de exportación y la creación de efectos inducidos sobre el resto de la economía. Porter, 1991.

(11) En el caso de Marruecos, las encuestas realizadas en el ámbito de la educación ofrecen suficientes datos sobre los que basar una política educativa de alcance. Véase Conseil National de la Jeunesse et de l’Avenir, 1998.

La *política tecnológica* (12) asegurará el éxito de la transferencia del “saber hacer” exterior cuando en los países receptores se desarrollen sistemas nacionales de ciencia y tecnología fuertemente conectados al sistema productivo (toda transferencia sin participación estrecha de la contraparte doméstica está condenada al fracaso, por eliminar los procesos de asimilación y aprendizaje, esenciales para la difusión de las innovaciones), se promoció en mucha mayor medida la formación/investigación de ingeniería y ciencias aplicadas, se fomenten instituciones públicas y/o privadas (parques y centros tecnológicos, centros de empresas e innovación, laboratorios de estandarización, certificación y medida, fundaciones universidad-empresa, oficinas de transferencia de los resultados de la investigación y organismos y agencias de fomento de la innovación) promotoras de la “interfaz” entre las esferas de la investigación y la producción y, claro está, se establezcan unas prioridades de acción adecuadas a las necesidades y objetivos previamente identificados por las propias empresas (Mella, 1999b).

La *política de infraestructuras* de transportes y comunicaciones — tantas veces preterida por las políticas de ajuste financiero— es merecedora de un status estratégico debido a los efectos multiplicadores de la dotación de capital público en la eficiencia y la productividad de las economías, como ha quedado bien demostrado en conocidas investigaciones (Aschauer, 1989). Además, la revolución en los sistemas logísticos permite minimizar los stocks de mercancías, optimizar el proceso de distribución “justo a tiempo” y satisfacer las necesidades del cliente en las nuevas condiciones de venta de los productos. Por tanto, se requiere un plan director de infraestructuras a medio plazo para el conjunto de la región magrebí, que satisfaga varios objetivos fundamentales: el desarrollo de redes de transporte multimodales (por carretera, vía férrea, marítima, aérea y tubería) que permitan la interconexión rápida y en buenas condiciones, tanto de los países del Magreb entre sí, como de éstos con la UE —especialmente reforzando el eje Magreb-Península Ibérica—, la amplia-

(12) La existencia de una integración y coordinación de las políticas tecnológicas nacionales —en el ámbito del Magreb— propiciaría la aparición de importantes economías de escala en este campo (Alcouffe, 1996). Téngase en cuenta que el mercado tecnológico se caracteriza por una información imperfecta (las innovaciones no son conocidas ni están disponibles para todos los países usuarios), por las externalidades que se logran por la participación de un número suficiente de agentes en las redes tecnológicas y, en consecuencia, por la necesidad de que el apoyo público en esta materia sea considerado como una cuestión de Estado, ajena a las peripecias de la coyuntura política.

ción de los sistemas viarios de autopistas y autovías, la mejora de la accesibilidad a las grandes ciudades y del tráfico urbano, la cooperación euro-mediterránea en materia de grandes puertos de contenedores para competir en el mercado internacional, el apoyo decidido a las infraestructuras y servicios de telecomunicaciones (vía satélite, fibra óptica y otras) que permitan beneficiarse al máximo de las nuevas tecnologías de la información, y la organización de mercados de transportes transparentes y eficientes capaces de atraer los ingentes recursos que demandan los anteriores proyectos de inversión.

La *política medioambiental* —lejos de ser considerada como un lujo de los países ricos— debe basarse en la “carta magrebí” para la protección del entorno y el desarrollo sostenible (13). En efecto, no hay duda de que la protección de los recursos hídricos exige la racionalización de su uso (14), el tratamiento de las aguas usadas y su posterior reutilización. Y la lucha contra la contaminación requiere la prevención, la eliminación y la gestión de los efectos negativos de cualquier fuente (agrícola, urbana, industrial o turística), que suponga un despilfarro de los recursos naturales. Sin embargo, el éxito de esta política —aparte de su extraordinaria subsidiariedad, respecto al modelo de desarrollo seguido— depende en gran medida de la sensibilidad ambiental —todavía reducida— de los ciudadanos, de la calidad de los mecanismos institucionales y legislativos puestos en práctica, de la descentralización a nivel local de los programas medioambientales y de la adecuada financiación de los mismos a través de los nuevos mecanismos basados en alguna forma de pago del recurso por parte del usuario y en el intercambio de naturaleza por deuda (15).

La política de promoción de empresas —basada en una prioridad explícita hacia las PYMES (Pequeñas y medianas empresas y, también, las

(13) Esta carta, que fue adoptada en 1992 —¡pero no ratificada todavía, para su entrada en vigor, por ninguno de los Estados!— por los Jefes de Estado de la Unión de Estados de la UMA en materia medioambiental, es muy importante; dado el carácter transfronterizo e internacional de los problemas ecológicos. El Plan Azul para el Mediterráneo, auspiciado por Naciones Unidas, es un buen ejemplo a seguir (Véase Kerdoun, 1998).

(14) La racionalización de su uso implica una reestructuración sectorial del crecimiento económico. La exportación de agua a través de la agricultura intensiva debería ser cuestionada y debería incentivarse la utilización del gas natural en la producción de electricidad.

(15) Este intercambio entre deuda y naturaleza consistiría en una negociación en la que el país deudor del Magreb —una vez determinado el montante de la deuda— se compromete a financiar los proyectos ambientales presentados y que serían realizados por empresas de los países acreedores de la UE. El saneamiento de aguas, el tratamiento de residuos y la contaminación atmosférica en las ciudades son buenos ejemplos en los que podrían realizarse una cooperación euromagrebí. Véase Benachenou, 1998.

microempresas) (16)— debería incidir en la creación de un entorno favorable, en el reforzamiento de las necesarias ventajas competitivas y en la regeneración del potencial de competencias internas. La creación de un entorno favorable está en estrecha conexión con las restantes políticas ya mencionadas: la política financiera para facilitar el acceso al crédito en condiciones idóneas de tipo de interés, la política de formación para elevar el nivel profesional de los recursos humanos, la política tecnológica para impulsar el cambio y la innovación, la política de infraestructuras para acompañar de suficiente capital público al sistema productivo y, en fin, la política medioambiental para conservar los recursos escasos y mejorar la calidad de la producción. El reforzamiento de las ventajas competitivas requiere situarse respecto a la competencia, tanto en términos de productos como de mercados. Esto significa, por un lado, desarrollar nuevos bienes/servicios de media y alta gama, lanzar colecciones propias y estimular las funciones de comercialización/marketing; y, por otro, buscar nuevos segmentos de clientes e insertarse en los circuitos internacionales de distribución. La regeneración de las competencias empresariales internas implica nuevas formas de gestión de carácter estratégico con una visión de medio plazo, la renovación de las tecnologías y los equipos empleados, la realización de actividades de I+D, la formación de la mano de obra, así como su integración en el seno de la empresa y, en definitiva, la búsqueda de la eficiencia productiva. Es evidente que todos estos cambios implican una transformación cultural de empresarios, trabajadores, y la cooperación en forma de partenariado con empresarios extranjeros, particularmente europeos y de otros países del Magreb.

En definitiva, es evidente que un programa tal de políticas públicas — como el anteriormente propuesto— demanda una resuelta voluntad política —por parte de los gobiernos del Magreb— mantenida en el tiempo, la concertación de los agentes públicos y privados (sociales y políticos) en torno a los objetivos fundamentales del cambio y el apoyo amplio de los medios creadores de opinión pública así como de la población.

(16) Las microempresas desempeñan un papel importante en la revitalización del tejido productivo y son (pueden ser) subcontratas de empresas de mayor tamaño. La mejora de la productividad y de la calidad de producción de las mismas dependerá de la instalación de centros de difusión de la innovación, de la formación de los empresarios afectados, de la asociación de los mismos, de la formación de redes y "cluster" locales y el desarrollo de formas de crédito adaptadas (como pone de manifiesto la experiencia en la ciudad de Casablanca). Véase Femise, 1999.

A MODO DE CONCLUSIÓN: DESARROLLO, COHESIÓN Y LIBERTAD

Un futuro de esperanza para el Magreb debe descansar en el crecimiento y desarrollo económicos, pero también en la cohesión social y en la libertad política.

El desarrollo económico está asociado al crecimiento del PIB real per cápita durante largos períodos de tiempo (en tasas anuales superiores al 3%), a la transformación estructural de la economía y a la estabilidad macroeconómica (Naqvi, 1995, citado por Sid Ahmed, 1998). Una tasa rápida de crecimiento de la economía —en los países del Magreb debería situarse en ritmos no inferiores al 6%— es una inexcusable condición del desarrollo. Pero ello exige un peso creciente de sector manufacturero y del resto de los sectores extra-agrarios en el conjunto de la economía. El desarrollo económico magrebí implica garantizar la estabilidad del crecimiento, que solo puede alcanzarse evitando las fluctuaciones propias de un sector agrario altamente dependiente de las condiciones climáticas. Al mismo tiempo, el logro de niveles superiores de renta per cápita depende de elevaciones de la productividad únicamente alcanzables con la incorporación de fuertes ritmos de progreso técnico inherentes a todo proceso de industrialización (17). Pero ello exige un peso creciente del sector manufacturero y del resto de los sectores extra-agrarios en el conjunto de la actividad económica; es decir, un cambio profundo en la estructura sectorial de las economías. La estabilidad macroeconómica requiere, en fin, una moderación de las tasas de inflación y de los saldos en las cuentas de las administraciones públicas y del sector exterior.

Sin embargo, el logro de una tasa sostenida de crecimiento (y desarrollo) a largo plazo no es posible sin un mínimo de cohesión social. Es más, la evidencia empírica parece mostrar que los países que más crecen a lo largo del tiempo son aquellos en los que existe una mayor equidistribución de la renta (Blank, 1994). Además, no debe olvidarse que el desa-

(17) La productividad del trabajo, en la que realmente se sustenta el crecimiento de la renta per capita, es no solo más elevada en las ramas industriales, sino que aumenta en ellas de manera más rápida. Sucede también que la expansión de los servicios está estrechamente asociada al crecimiento de la industria, porque depende de la demanda que recibe de ésta y porque necesita de los medios de producción que le proporciona, auténtica fuente de progreso técnico. Así pues, el proceso de desarrollo económico deberá contar necesariamente con el crecimiento de la industria; de lo contrario, se vería sometido a un poderoso grillete que impediría el despliegue de las posibilidades potenciales del conjunto de la economía.

rrollo lleva consigo la ampliación de las clases medias, que dotan de una mayor estabilidad (política y social) a los países, lo que a su vez es una fuente de progreso económico.

Por tanto, aunque el desarrollo económico requiere elevadas tasas de inversión, no debe considerarse al desarrollo social como una forma de consumo negativa —en tanto que succionadora de recursos— para el crecimiento, sino como un modo de inversión correlacionado positivamente con el mismo. De ahí que el papel del sector público sea muy importante en la lucha contra la pobreza, creando sistemas de seguridad social, pero también —dado el carácter rural de la pobreza y el éxodo a la ciudad, que crea en buena medida la pobreza urbana— programas de desarrollo rural centrados en la creación tanto de actividades agrarias como extra-agrarias (18). Naturalmente, el éxito de estos programas requiere la identificación precisa de quiénes son realmente pobres, la focalización de los mismos en la promoción de las mujeres, el impulso de la educación en las zonas rurales, el aumento de las facilidades de acceso a la tierra y al agua por parte de los campesinos pobres, la provisión de sistemas de crédito y la implementación descentralizada de los proyectos de desarrollo.

La envergadura de tales transformaciones económicas y sociales demanda la reforma en profundidad de los actuales aparatos de los Estados (administrativa, jurídica y legalmente, pero sobre todo políticamente) para evitar la monopolización del poder político, liberar las fuerzas de una sociedad civil cada vez más organizada, y promover la descentralización política y el acercamiento de la administración al ciudadano. En otras palabras, el cambio económico hacia mayores niveles de vida y bienestar de la población está reclamando instituciones propias de un Estado de derecho; que aseguren las libertades democráticas, el protagonismo de los poderes locales (muy especialmente, en las ciudades), el diálogo entre puntos de vista discrepantes y el consenso de las diferentes fuerzas políticas en torno a los objetivos fundamentales de los países, como partes inseparablemente unidas a una nueva cultura en las actuales sociedades árabes del Magreb en este umbral del siglo XXI.

(18) En este sentido, la experiencia de otros países —como la de México— en donde se instrumentan “Programas de Desarrollo Regional Sostenibles” —que tienen por objeto la elevación de la calidad de vida de la población por medio de la promoción de inversiones en infraestructuras, la inducción de sistemas productivos locales eficientes económica y ambientalmente, el fortalecimiento de la capacidad local de desarrollo y el aumento de la participación social— puede ser de gran interés. Véase Guevara, 1999.

BIBLIOGRAFÍA

- ALCOUFFE, A. (1996): "Systèmes nationaux de RD et zones d'intégration: le cas de l'Union du Magreb Arabe". *Annales Marocaines d'Economie*, n.º 15, pp. 167-184.
- AMMONS, A. (1997): "Les transports maghrebins", en Sefrioui, F. (Dir), "Globalisation & Competitivité", Réseau Esprit, Rabat, pp. 177-198.
- ASCHAUER, D.A. (1989): "Is public expenditure productive?". *Journal of Monetary Economics*, n.º 23, pp. 177-200.
- BEDRANI, S.; ELLOUMI, M. (1998): "Impact des politiques économiques sur la désertification: le cas des pays du Magreb", en Sid Ahmed, A. "Economies du Magreb. L'Impératif de Barcelone", CNRS Editions, Paris, pp- 115-132.
- BENACHENOU, Y. (1998): "Environnement et développement en Méditerranée, stratégies pour le futur". *L'Annuaire de la Méditerranée 1998*. Publisud. Paris, pp.306-324.
- BLANK, R. (Ed.) (1994): "Social protection versus Economic Flexibility". University of Chicago Press.
- CERED (1989): "Variables socio-démographiques au Maroc. Les Interdépendences". Centre d'Etudes et de Recherches Démographiques, Rabat.
- CMC (1998): "Libre échange et mise à niveau. Impact à l'horizon 2010". Centre Marocain de Conjoncture, Casablanca.
- CONSEIL NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DE L'AVENIR (1998): *Enquête Nationale "Jeunes et Administration". Présentation des résultats*. Collection Enquêtes, Rabat.
- CÔTE, M. (1998): "Eau, environnement, et développement au Magreb", en Sid Ahmed, A., op. cit., pp. 103-114.
- COURBAGE, Y. (1997): "La démographie en rive sud de la Méditerranée au XXI siècle, entre la sinistrose et l'espoir". *L'Annuaire de la Méditerranée 1997*. Publisud, Paris, pp. 121-147.
- CRESPO, C. (1999): "Insuficiencia alimentaria y agricultura en el Magreb". Proyecto de Fin de Carrera. Universidad Autónoma de Madrid.
- DAGUZAN, J.F. (1998): "État, science, recherche et développement technologique au Magreb", en Sid Ahmed, A., op. cit. pp. 90-102.
- DENIEVIL, P.N.; B'CHIR, A. (1998): "La PME tunisienne", en Sid Ahmed, A., op. cit., pp. 181-198.
- EL KAOUACHI, F. (1996): "L'entreprise marocaine du textile face aux exigences de l'OMC", en Federation des Chambres de Commerce et D'industrie du Maroc, op. cit., pp. 104-122.
- ESCRIBANO, G. (1998): "Políticas comerciales en el Magreb", en Lorca, A.; Escribano, G., op. cit., pp. 113-140.
- FEMISE (1999): "Le Partenariat Euro-Méditerranéen". Institut de la Méditerranée.
- GRIFFIN, K.; KHAN, A. R. (1992): "Globalization and the Developing World: An Essay on the International Dimensions of Development in the Post-Cold War Era". HDRO Occasional Paper, n.º 2, PNUD, Nueva York.
- GUEVARA, A. (1999): "Pobreza y medio ambiente en México: Evaluación y perspectivas económicas de una política pública". Tesis doctoral en elaboración. Universidad Autónoma de Madrid.
- JAIDI, L.; ZAIM, F. (1998): "L'industrie marocaine face au défi du libre-échange: enjeux, rôle des acteurs et contrainte de financement", en Ahmed, A., op. cit., pp. 60-88.

- KERDOUN, A. (1998): "*Environnement et développement en Méditerranée, stratégies pour le futur*". L'Annuaire de la Méditerranée 1998. Publisud, Paris, pp. 306-324.
- LORCA, A.; ESCRIBANO, G. (1998): "*Las economías del Magreb. Opciones para el siglo XXI*". Pirámide, Madrid.
- MAHIOU, A. (1998): "*L'état de l'UMA à l'heure des nouvelles perspectives euro-méditerranéennes*", en L'Annuaire de la Méditerranée 1998, pp. 92-119.
- MELLA, J.M. (1997): "*La Asociación Euro-mediterránea en el actual contexto de globalización y regionalización*". Información Comercial Española, n.º 759, pp. 33-42.
- MELLA, J.M. (1999): "*La transferencia de tecnología en las relaciones euromediterráneas*". Revista de la Unión Europea (de próxima aparición).
- MELLA, J.M. (1999): "*Enjeux et perspectives de l'accord de libre-échange euro-méditerranéen en matière agricole*", en Regnault, H.; Roux, B., "*Euro-Méditerranée: les relations agro-alimentaires*". L'Harmattan, Paris (en prensa).
- MOGHADAM, V. M. (1998): "*Women, Work and Economic Reform in the Middle East and North Africa*". Lynne Rienner Publishers. Londres.
- NAQVI, S.N.H. (1995): "*The nature of economic development*". World Development, vol. 23, n.º 4, pp. 543-557.
- PNUD (1996): "*Informe sobre el desarrollo humano 1995*".
- PORTER, M. (1991): "*La ventaja competitiva de las naciones*". Plaza y Janés, Madrid.
- REGNAULT, H. (1998): "*Asymétrie d'intégration et construction euro-méditerranéenne: quelle dynamique pour une sous-intégration régionale au Magreb?*", en L'Annuaire de la Méditerranée 1998. Publisud, Paris, pp. 120-130.
- SAD SAADI, M. (1996): "*L'entreprise marocaine face à la zone de libre-échange euro-méditerranéenne*", en Federation des Chambres de Commerce et D'industrie du Maroc, "*L'entreprise marocaine entre les exigences de l'organisation mondiale du commerce et les défis de la zone de libre échange*". Rabat, pp. 51-66.
- SAOUD, M. (1997): "*Vers une infrastructure de l'information en Méditerranée*". L'Annuaire de la Méditerranée 1997, pp. 292-302.
- SID AHMED, A. (1989): "*Economie de l'industrialisation à partir de ressources naturelles*". Publisud, Paris.
- SID AHMED, A. (1995): "*Vers une nouvelle stratégie maghrébine de développement*", en Daguzan, J. F.; Girardet, R. (Eds.), "*La Méditerranée: Nouveaux défis, nouveaux risques*". Publisud, Pariss, pp. 167-237.
- SID AHMED, A. (1998): "*Les économies maghrébines face aux défis de la zone de libre-échange euro-méditerranéenne*", en Sid Ahmed, A., op. cit., pp. 197-214.
- TANGEQUI, S. (1998): "*Les entrepreneurs maghrébins dans la perspective de l'accord de Barcelona*", en Sid Ahmed, A., op. cit., pp. 161-168.
- World Bank (1995): "*Republic of Tunisia, Poverty Alleviation: Preserving Progress while Preparing for the Future*", Vol I y II, Washington D.C.
- World Bank (1994): "*Kingdom of Morocco: Poverty, Adjustment, and growth*". Vols. I y II. Washington D.C.
- ZAIM, F.; JAIDI, J. (1995): "*L'économie des pays méditerranéens*", en Bistolfi, F., "*Euro-Méditerranée. Une région à construire*". Publisud, Paris.